

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 14º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2475-2024
CARATULADO : ANGLÉS/FISCO DE CHILE - CONSEJO DE
DEFENSA

Santiago, trece de enero de dos mil veinticinco

VISTOS:

Comparece don MIGUEL PEDRO ANGLÉS CHATEAU, empleado, con domicilio para estos efectos en Badajoz N° 100, oficina 1113, Comuna de Las Condes, quien de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del FISCO DE CHILE, representado legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, cuyo presidente es don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, todos domiciliados, para estos efectos, en Agustinas N° 1225, piso 4, comuna de Santiago, solicitando admitir la demanda a tramitación, acogerla en todas sus partes y, en definitiva, condenar al Fisco de Chile al pago de \$150.000.000, más reajustes e intereses; o, en subsidio, el monto menor que el tribunal determine conforme al mérito de autos, con expresa condena en costas, por los graves hechos y fundamentos de derecho que a continuación expone.

Capítulo I.ANTECEDENTES GENERALES

I. “Detención” en septiembre de 1974

1. El día 11 de septiembre del año 1973 ocurrió el “golpe militar” en nuestro país. En aquella época, el actor tenía 28 años y vivía junto a su señora (llevaban pocos meses de casados) quien estaba embarazada de 7 meses, de su primera hija.
2. El día 16 de septiembre de 1974, alrededor de las 21:00 horas, estaba cerrando la zapatería en la que trabajaba, cuando fue detenido por un grupo de hombres armados, quienes le obligaron a subir, a la fuerza, a la camioneta marca Chevrolet en que se movilizaban.
3. En su interior, le vendaron los ojos y le amarraron las manos, para luego conducirlo hasta una casa ubicada en la calle José Domingo Cañas. Antes de que logran vendarle los ojos, pudo reconocer en el piso de la camioneta a su amigo



y compañero de partido, don Luis Durán, quien estaba en muy malas condiciones físicas.

4. Durante la noche de su detención en la casa, fue amenazado de forma constante: si no colaboraba, iban a traer a su esposa e hija al lugar de detención para ser torturadas en frente de él.

5. En la estadía en aquel lugar, fue retenido en un dormitorio junto con varias personas más, siempre con los ojos vendados e inmovilizado. Todos debían dormir en el suelo y no fueron alimentados. En adición, en repetidas ocasiones fue llevado a una pieza de la casa, en la que fue golpeado y torturado con aplicación de corriente en diversas partes de su cuerpo, con la única intención de que informara los lugares en que se “escondían” diferentes dirigentes del MAPU, formas de financiamiento del partido, nombres de quienes eran sus dirigentes, entre otros datos.

6. En este recinto estuvo detenido, contra su voluntad y sin información alguna, durante aproximadamente diez días.

7. Luego, fue trasladado al denominado recinto “Cuatro Álamos”. En este recinto compartió celda con compañeros conocidos. Un día de su detención, con la intención de continuar su interrogatorio, fue trasladado a Villa Grimaldi: ahí nuevamente lo golpearon e interrogaron, para luego reenviarlo a Cuatro Álamos.

II. Tres Álamos y su expulsión a Francia.

8. Después de varios días detenido ilegalmente, fue finalmente trasladado a Tres Álamos, recinto en el que fue finalmente reconocido como preso y pudo reencontrarse con su familia. En este sitio estuvo recluido hasta febrero del año 1975.

9. Tras su salida de Tres Álamos, mediante el decreto N° 149 de fecha 5 de febrero de 1975, fue expulsado del país. ¿El motivo? Se le consideraba un ciudadano chileno que constituía un peligro para la seguridad interior del Estado, en virtud de los antecedentes que obraban en poder del Ministerio del Interior.

10. Refiere que nunca conoció cuales serían los “antecedentes” que permitían que se le catalogara como un peligro para la seguridad del Estado. Tampoco se



le informó qué procedimiento legal se había seguido para arribar a tal determinación.

11. Un mes más tarde de su expulsión, logró reunirse —en Francia—con su mujer y su hija, quienes pudieron salir del país gracias al programa de “Reagrupación Familiar de las Naciones Unidas”.

12. Este exilio se extendió durante 10 años años. Sólo recién en el mes de octubre del año 1984, le permitieron reingresar al país, luego del injusto castigo al que había sido sometido sin proceso alguno en su contra.

13. En la actualidad continúa viviendo en Chile, y se le ha reconocido en su calidad de víctima de los crímenes cometidos durante el Gobierno Militar. Por lo anterior, es beneficiario de la “Pensión Valech”.

Capítulo II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La procedencia de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.

14. Nuestro Código Civil establece en su artículo 2314 que “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.

15. Es decir, cuando una persona o grupo de personas produce daño a otro ya sea en su persona o patrimonio debe hacerse responsable, en este sentido, la responsabilidad se ha entendido como la obligación que tiene una persona de reparar adecuadamente el perjuicio causado.

16. En el caso concreto se cumplen todos y cada uno de los requisitos que se establecen para determinar la responsabilidad civil de la demandada.

17. En primer lugar, los agentes estatales y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia cometieron actos ilícitos, antijurídicos y culpables, toda vez que no solo lo sometieron a detenciones ilegales, sino que también a tratos inhumanos y degradantes que culminaron con su exilio del país.

18. En efecto, los actos descritos en lo principal de su presentación se llevaron a cabo con dolo, toda vez que existió una intención clara por parte de los perpetradores de causarle daño, tanto físico como emocional.



19. En segundo lugar, el daño que se le ha ocasionado es innegable y ha repercutido durante toda su vida. Fue “exiliado” de su propio país y perdió la oportunidad de compartir con su familia y amigos.

20. Este daño sufrido, por tanto, no sólo debe considerarse respecto a lo físico, es decir, las detenciones y torturas sufridas, sino que también debe considerarse el daño moral. El daño moral no solo se extendió a los temores y perturbaciones de los actos cometidos en su contra, sino también el sufrimiento y la tortura que significó la separación de su hija recién nacida y vivir la consecuencial separación de la familia que quedó en Chile.

21. A este respecto, es relevante establecer que la tortura se ha entendido como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

22. Conforme a la definición citada, es innegable que fue víctima de torturas: ello es relevante ya que la tortura es un crimen contra la humanidad y, como tal, no se encuentra limitada por las regulaciones del derecho interno.

23. La gravedad de los hechos que ha vivido es notoria, así como también lo son las repercusiones emocionales que conlleva ser víctima de tortura, toda vez que implica un atentado a su integridad física y psicológica, acarreando daños que no pueden ser revertidos.

24. En virtud de ello, avalúa el daño sufrido en la suma de \$150.000.000.

25. Finalmente, en el caso concreto se verifica en forma absoluta la relación de causalidad entre los ilícitos cometidos por los agentes estatales y el inconmensurable daño que ha sufrido.

II. Legitimación Pasiva del Fisco de Chile.



26. Tal como mencionó en el primer apartado de esta presentación, los violentos hechos descritos fueron cometidos por agentes estatales en el período de la dictadura militar que afectó a su país.

27. Al respecto, cita lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nro. 18.575, en cuanto este menciona que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.

28. Aquella normativa es absolutamente aplicable al caso concreto, toda vez que los agentes policiales en el ejercicio de sus funciones lo detuvieron en forma ilegal, sometiéndolo no sólo a la incomunicación, sino que también a tratos inhumanos y degradantes por un largo periodo de tiempo de tiempo (aproximadamente durante 2 meses) para luego expulsarlo, sin causa legal alguna, de su país.

29. A mayor abundamiento, el derecho internacional de los derechos humanos, en su normativa, ha hecho referencia a la responsabilidad que deben asumir los estados en este tipo de situaciones.

30. En específico, el artículo 14 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que “todo Estado velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible (...)”.

31. Sumado a ello, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

32. Asimismo, el artículo 9.5 de aquel instrumento menciona que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.

33. Lo señalado, es ratificado por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5.2, ya que establece que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.



34. En síntesis, tanto la normativa nacional como internacional se encuentran contestes en el hecho de que los tratos a los que fue sometido son absolutamente reprochables, y es el Estado el encargado de reparar los perjuicios sufridos por la víctima de torturas, sobre todo cuando dichos actos son perpetrados por agentes estatales.

III. Imprescriptibilidad de la acción civil.

35. La prescripción es una institución que se establece en nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de otorgar seguridad a los actos jurídicos y materiales llevados a cabo por los sujetos.

36. A pesar de la importancia de la institución, nuestros máximos tribunales de justicia, en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, han establecido que en este tipo de casos –en que se compromete el interés público y los derechos humanos–, no es posible aplicar las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles.

37. La Excma. Corte Suprema así lo ha reconocido (sentencia de 16 de junio de 2020). Transcribe considerando quinto.

38. Es decir, nuestros tribunales de justicia no pueden aplicar la normativa interna para eludir el indemnizar los perjuicios derivados de actos que han sido catalogados como crímenes contra la humanidad.

39. Refiere que lo anterior, ha sido mencionado explícitamente por la Corte Suprema en la Causa Rol Nro. 9797-2022. Transcribe considerando Décimo Primero.

40. En consecuencia, es indiscutible dada la consistencia de la jurisprudencia nacional e internacional que la institución de la prescripción no es aplicable a este tipo de casos, toda vez que los intereses públicos en juego son sumamente superiores a los valores que representa dicha institución.

Concluye solicitando tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, ya individualizado, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, condenando al demandado a pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, la cantidad de \$150.000.000 más los reajustes e intereses que se devenguen desde la fecha de presentación de la demanda y hasta que esta se encuentre ejecutoriada; o, en



subsidio, condenar al demandado al monto que el tribunal determine conforme al mérito de autos; todo lo anterior, con expresa condena costas.

A folio 7, acta de 18 de marzo de 2024, consta certificación de Ministro de Fe de haber notificado la demanda personalmente a don Raúl Letelier Wartenberg, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, en representación de Fisco de Chile.

A folio 8, presentación de 10 de abril de 2024, comparece Daniela Domínguez Domínguez, Abogada Procurador Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida en autos por quien señala tener la calidad de víctima reconocida de detención, tortura y apremios ilegítimos en dictadura, solicitando reparación por daño moral con motivo de la detención ilegal, apremios ilegítimos y torturas, cometidos por agentes del Estado conforme al relato expuesto en la demanda.

I. EXCEPCIONES, DEFENSAS Y ALEGACIONES QUE SE OPONEN A LA DEMANDA.

I.1. Excepción de reparación integral satisfactiva.

Opone a la acción deducida, la excepción de reparación integral y satisfactiva, por haber sido ya indemnizada la parte demandante a través de las medidas contempladas en las leyes de reparación y que limitan las pretensiones indemnizatorias.

I.1.1. Marco general sobre las reparaciones otorgadas por el Estado.

Manifiesta que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”.

Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia



transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Recordemos que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas.

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

I.1.2. La complejidad reparatoria.

Como bien lo expresa Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta



a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto⁶. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado.



Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Asumida esta idea reparatoria, las leyes 19.123, 19.992, y las demás normas conexas han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará al tribunal a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

I.1.3. Reparación mediante transferencias directas de dinero.

Diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

- a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);



b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992;

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar, lo cual da como resultado un impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones bastante alto.

I.1.4. Reparaciones Específicas.

Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos.

En lo tocante al caso que nos ocupa, señala que la parte demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

La ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.



De esta forma, conforme acreditará en la etapa procesal pertinente, la parte demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

I.1.5. Reparaciones Mediante La Asignación De Derechos Sobre Prestaciones Estatales Específicas.

Tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006 y en el año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883.-

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores.

A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para



estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

I.1.6. Reparaciones simbólicas.

Al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, expresa que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, “pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) “Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida” y b) “Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo”.

En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como la construcción de memoriales, un museo de la memoria y los Derechos Humanos, la conmemoración del “Día Nacional del Detenido Desaparecido” y el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos humanos. Todos ellos



unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etcétera.

I.1.7. La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”.

En el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

En este mismo orden de ideas, menciona que el documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.



Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

En conclusión, estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la parte demandante de la presente causa.

I.2. Excepción de prescripción extintiva.

I.2.1. Normas De Prescripción Aplicables.

Opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que,



por encontrarse prescritas conforme al relato efectuado por la demandante, se rechaza la demanda en todas sus partes.

Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

I.2.2. Generalidades Sobre La Prescripción.

Sostiene que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”.

Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”



Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, y que transcribe.

Agrega que esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

I.2.3. Fundamento de la prescripción.

La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones, es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un



beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

La prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

I.2.4. Jurisprudencia Sobre La Prescripción.

I.2.4.1. La Sentencia del Pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013.

Como es de público conocimiento, nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

En dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;



2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por esta defensa, lo que solicitamos se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis.

I.2.5. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de



prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

I.2.6. Normas Contenidas En El Derecho Internacional.

Finalmente, en relación a aquellas posturas que sostienen la imprescriptibilidad de la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños conforme al derecho internacional de los derechos humanos, estas deben ser desmentidas. Este sentido, su parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

- La “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

- Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

- La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación



Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

- La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

En relación a esta Convención destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho internacional ni de la institución de la prescripción, en Chile.

Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Finalmente, señala que el planteamiento de la defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país en reiterados fallos.

No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.



Con el mérito de lo expuesto precedentemente el tribunal deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

II. En cuanto al daño e indemnización reclamada.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procedo a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada.

II.1.1. Fijación de la indemnización por daño moral.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo.

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Ha dicho la Excma. Corte Suprema: “Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”.



Es en la perspectiva antes indicada, que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, las cifras pretendidas en la demanda como única y exclusiva compensación del daño moral, resultan por demás manifiestamente excesivas, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en este caso en particular y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con extrema prudencia.

En efecto, la Corte Suprema mediante reciente sentencia dictada el 4 de octubre de 2023, en autos Rol N° 171.801-2022 ha sido clara en poner de relieve la importancia de analizar las circunstancias fácticas de la detención de los demandados al momento de fijar la indemnización. Así, estimó que no puede ponderarse como igual una detención que duró un lapso de horas frente a otra que se extendió por cerca de un mes, y en definitiva fijó indemnizaciones que van desde los \$3.000.000 a los \$25.000.000, reservando este último monto para el caso más grave.

De este modo, se hace presente que los fallos judiciales han mantenido alguna correspondencia entre ellos, lo que demuestra que cabe aplicar principios de racionalidad y prudencia en la regulación de aquél, los que pugnan con una tasación genérica o abstracta de los mismos. Dicho imperativo en la determinación del daño, ha sido establecida por la jurisprudencia reciente de la Excma. Corte S. (transcribe Considerando Cuarto, fallo Excma Corte Suprema, 16 de enero de 2024, rol 147.192-2023).

Sostiene que cualquier otro criterio vulnerará la igualdad. Por ello, la afectación de los atributos personalísimos debe compensarse con una suma razonable y prudente para lograr la finalidad de la indemnización, que no es la



sanción, pues la estructura jurídica indemnizatoria chilena no contempla tampoco la existencia de “indemnizaciones punitivas”, como sí lo hacen en cambio otras legislaciones del derecho comparado, ni el lucro tampoco, sino el carácter de puramente satisfactivo.

II.1.2. La especial naturaleza que informa al daño moral que se alega, no exime a la parte de su carga de probar su efectiva concurrencia y de una valoración racional y prudente del Juez.

Manifiesta que sin desconocer su parte los graves hechos de violación a los Derechos Humanos ocurridos en dictadura y en los cuales se funda el daño que se reclama, se hace presente que ello no significa que se tenga por acreditada su efectiva ocurrencia en cada caso por el sólo hecho de ser mencionado en la demanda. Se impone a este respecto, observar la necesaria distinción entre la presunción como herramienta jurídica normativa y aquella que se emplea como medio de convicción judicial, pues si bien es perfectamente factible que el fallador arribe a la conclusión que, efectivamente, se verificó una afectación moral indemnizable a partir de una multiplicidad de hechos graves, ciertos y conocidos, (demostrables al menos indirectamente), ello no exime a la parte demandante de probar su daño, ya que no existe norma alguna que permita presumir la concurrencia del daño moral ni mucho menos a invertir el peso de la prueba en la materia.

Es por eso que la dogmática más autorizada, en tal sentido, enseña lo siguiente: *“La última rectificación urgente que requiere nuestra teoría del daño moral es el principio, refrendado en infinidad de sentencias, de que esta especie de perjuicio no requiere prueba. Toda la doctrina especializada reciente, no obstante, es contraria a esa comprensión e incluso ha recibido cada vez mayor recepción en las sentencias. Ésta es quizás la más urgente de las correcciones que nuestro sistema requiere, porque eso ha determinados varios de los problemas que la partida presenta. De modo principal, ello ha generado la ausencia de elementos en el proceso que permitan efectuar la evaluación de un modo más fundado. Se trata de una doctrina, elaborada por nuestros tribunales, que les impide a ellos obtener los elementos de probanza que se requieren para que la evaluación deje de ser absolutamente personal, variable en cada juez (...) Recientemente, empero, una revisión global de la jurisprudencia permite observar una progresiva evolución en orden a exigir la acreditación del daño moral y, con ello, a intentar contar con bases que permitan hacer una valoración más fundada”*.



Y siempre en relación con la cuantificación de este género de indemnizaciones, viene al caso recordar que si bien es cierto que no está sujeta a tarifas o valoraciones en texto positivo alguno, los fallos judiciales han mantenido alguna correspondencia entre ellos, lo que demuestra que cabe aplicar principios de racionalidad y prudencia en la regulación de aquél, los que pugnan con una tasación genérica o abstracta.

En relación con este último particular, resultará del todo pertinente consignar acá que los tribunales superiores en fecha reciente, han declarado, además, que la constatación de la efectiva concurrencia y valoración de los perjuicios morales no se puede dar por establecida con el sólo hecho de haberse incorporado los nombres de las víctimas en las nóminas libradas por los órganos encargados de materializar los beneficios de las leyes de reparación, estableciéndose incluso que, a falta de mayor prueba, dichas pretensiones deben ser desestimadas”.

Así mismo, tal como ha señalado nuestra jurisprudencia en esta materia, existe el imperativo de analizar en detalle los antecedentes en que se fundan los perjuicios que la detención, tortura y apremios ilegítimos provocaron a la parte en el caso particular, así lo ha indicado expresamente la Excma. Corte Suprema (transcribe considerando décimo tercero, fallo Excma Corte Suprema, 4 de octubre de 2023, rol 171.801-2022).

Expresa que en su sentencia de reemplazo, nuestro máximo tribunal deja establecido que, en la determinación del monto indemnizatorio se deben considerar necesariamente las circunstancias fácticas de la detención de los demandantes, ya que son el sustento de su acción y varían en cada caso: “así, no puede ponderarse como igual al momento de determinar el monto a indemnizar, una detención que duró un lapso de horas frente a otra que se extendió por cerca de un mes, al igual que los pesares sufridos por cada uno de los demandantes, de modo que teniendo presente los hechos asentados y que han sido reproducidos en el considerando quinto, se estará a ellos a fin de determinar el monto a indemnizar respecto de cada demandante, toda vez que como se ha venido indicando cada situación es diversa y debe ser ponderada conforme a los hechos efectivamente asentados”.

De esta forma, el Tribunal ha de establecer los hechos materiales que determinan la existencia del daño invocado, los aspectos que reflejan su



ilegitimidad y los factores que tiene en consideración para proceder a su regulación, tarea a la cual aportan el cúmulo de herramientas de las que se deja constancia con precedencia.

II.1.3. En subsidio de las excepciones anteriormente expuestas, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Su parte alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la parte demandante a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

III. Improcedencia del pago de reajustes e intereses.

Además de lo alegado, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

A la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el fisco de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección



monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por ejemplo, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1º, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia, “En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio.”

Por consiguiente, el hipotético caso de que S.S. decida acoger la acción de autos y condene al Fisco al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y esta parte incurra en mora.

Concluye solicitando tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Al Primer Otrosí, el Consejo de Defensa del Estado solicita oficiar al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido la parte demandante, especialmente en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y demás pertinentes; a lo que el tribunal accede a folio 11.

A folio 11, resolución de 29 de abril de 2024, se tiene por contestada la demanda, otorgando traslado para la réplica.

A folio 12, la parte demandante evacua trámite de réplica, reiterando lo expuesto en su demanda y haciendo algunas precisiones en cuanto a la contestación de la parte demandada.



A folio 13, resolución de 20 de mayo de 2024, se tiene por evacuada la réplica, otorgando traslado para la réplica.

A folio 14, la parte demandada evacúa réplica, ratificando lo expuesto en su contestación, y contra-argumentando lo expuesto por el demandante en escrito de réplica.

A folio 18, resolución de 26 de julio de 2024, se recibe la causa a prueba por el término legal, señalándose los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, sobre los cuales deberá recaer la prueba. A folio 19, consta certificación de Ministro de Fe de haber notificado la interlocutoria de prueba a la parte demandada. A folio 21, la parte demandante se notifica expresamente de la interlocutoria de prueba.

A folio 23, la parte demandante presenta lista de testigos, lo que el tribunal tiene presente a folio 25, citándolos.

A folio 29, acta de 24 de octubre de 2024, consta audiencia de prueba testimonial ofrecida por la parte demandante, con la asistencia del apoderado de la demandante y en rebeldía de la parte demandada, y la testigo: Paulina Espinoza Hidalgo, respecto a quien no se oponen tachas.

A folio 35, se cita a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Miguel Pedro Anglés Chateau, quien impetra demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo del Defensa del Estado, por el daño moral provocado por los delitos de detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos en su persona, en concepto de violación a los derechos humanos, solicitando una indemnización ascendente a \$150.000.000; de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en su libelo de demanda, los que han sido precedentemente reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

SEGUNDO: Que legalmente emplazado, el demandado Fisco de Chile, representado por el Consejo del Defensa del Estado, contesta la demanda solicitando su total rechazo, deduciendo excepciones de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante por la misma causa, prescripción extintiva de la acción deducida, y las demás alegaciones y defensas expuestas; de



acuerdo a lo que ha sido reseñado en lo expositivo de esta sentencia.

TERCERO: Que a folio 18, resolución de 26 de julio de 2024, se recibe la causa a prueba por el término legal, señalándose los siguientes hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, sobre los cuales deberá recaer la prueba.

- 1) Hechos y circunstancias en que se produjeron los perjuicios. En la afirmativa, hechos, motivos, naturaleza y montos de estos.
- 2) Efectividad de la responsabilidad imputada a la parte demandada.
- 3) Efectividad de que el Fisco de Chile ha efectuado las medidas posibles y conducentes a una reparación integral del daño causado.
- 4) Hechos constitutivos de la prescripción alegada.

CUARTO: Que en autos obra la siguiente prueba documental acompañada legalmente por la parte demandante y tenida por no objetada por la demandada; a saber:

- 1.- Copia digital Decreto N° 149 de 05 de febrero de 1975, emanado de Presidente de la República, que decreta el abandono obligado del país de varios ciudadanos, entre ellos don Miguel Anglés Chateau, por “constituir un peligro para la seguridad interior del Estado”.
- 2.- Copia digital de partes de expediente de don Miguel Pedro Anglés Chateau archivados en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
- 3.- Copia digital documento denominado “Evaluación de Daño” de fecha 05 de septiembre de 2024, respecto a don Miguel Pedro Anglés Chateau, evaluado por Ignacio Andrés Fernández Rosas, Psicólogo Universidad de Chile Magíster Psicología Clínica Adultos. Universidad de Chile.

QUINTO: Que a folio 29, conta la prueba testimonial ofrecida por el actor, con la asistencia de la testigo Paulina Espinoza Hidalgo, quien legalmente examinada y juramentada, sin tachas, interrogada al tenor del punto 1 de la interlocutoria de prueba expone que fue casada con Miguel Angles durante treinta y tres años, él fue detenido en el mes de septiembre de 1974, estuvo detenido y luego expulsado del país; que en esa época tenían una niña que tenía diez meses de edad, tiempo durante el que su marido no la vio, ni tuvo contacto con ella. Estuvo desaparecido durante un mes, él desapareció desde la calle, luego un mes



después la llamaron para decirle que estaba detenido, con todas las implicancias afectivas emocionales y económicas que eso significó para la familia, que ella en esa época era estudiante y no tenía ingresos, por lo que no pudo sostenerse y tuvo que volver a casa de sus padres. A nivel emocional eso significó que su hija vio a su padre una vez en esos meses que él estuvo detenido. Narra que tuvieron que partir al exilio y eso significó que su vida se vio afectada por el corte con el país, con la familia, ella se encontró con un hombre distinto, enfermo físicamente y con cambios en su personalidad en el sentido de que estaba más irascible, tenía pesadillas en las noches. Cuando llegaron a encontrarse con él, su hija no lo reconoció y se negaba a irse con él, a que él la tomara en brazos. Estuvieron once años en el exilio, que significó momentos de mucha soledad porque eran jóvenes y quedaron muy aislados de su red familiar. Su marido vivió mucho tiempo enojado y frustrado de haber sido expulsado de su país, hasta que lograron volver. Eso también significó un esfuerzo emocional y económico para adaptarse a una realidad que no conocían después de tanto tiempo. Tuvo perjuicios emocionales, él fue sometido a tortura y ella cree que él cambió mucho después de lo que le pasó, perjuicios económicos porque tuvieron que partir de cero, se corta una vida y tuvieron que aprender un idioma nuevo, buscar trabajo en una sociedad que no conocían, sin herramientas. Cuando llegaron a Francia él llegó muy enfermo y con problemas porque tenía infecciones producto de los malos tratos y de la alimentación, en las articulaciones tenía problemas en las rodillas, durante mucho tiempo estuvo enfermo, psicológicamente se convirtió en un hombre muy irascible, con mal dormir y pesadillas e hiper aprensivo con su hija, la niña siempre tenía que estar cerca de él para tener el control y ver que ella estuviera bien, además del esfuerzo que él tuvo que hacer y el dolor de tener que revincularse con su hija. El monto de los perjuicios no los sabe, no sabe cuánto vale el corte de una vida.

SEXTO: Que en autos obra la siguiente prueba documental acompañada legalmente por la parte demandada Fisco de Chile, representada por Consejo del Defensa del Estado, no objetada de contrario:

- 1.- Copia digital Certificado emitido por Secretaria Abogado del Consejo de Defensa del Estado que corresponde que la Directivo, Grado 4º de la E.U.R., abogada Sra. Daniela Domínguez Domínguez, subrogue al Abogado Procurador Fiscal de Santiago, los días 10, 11 y 12 de abril de 2024.
- 2.- Copia digital de publicación en Diario Oficial de 28 de diciembre de 2023



de Resolución TRA 45/4/2023 de 16 de noviembre de 2023, que nombra a Marcelo Eduardo Chandía Peña, en el cargo de Abogado Procurador Fiscal de Santiago, grado 2º Escala Única de Sueldos, de la Planta de Directivos, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 17 de noviembre de 2023.

SÉPTIMO: Que a folio 24 consta ORD. DSGT N° 27792/2024, de 09 de octubre de 2024, emanado de Jefe Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social (IPS), que informa beneficios de reparación Leyes N° 19.992 y N° 20.874, recibidos por don Miguel Pedro Anglés Chateau, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech).

Período	Pensión Ley 19.992	Aporte Unico Ley 20.874	Aguinaldos	Total a la fecha	Pensión actual
05-2005 a 09-2024	\$ 43.542.818	\$1.000.000	\$683.941.-	\$45.226.759	\$290.413

OCTAVO: Que la acción civil de indemnización de perjuicios por daño moral deducida en autos por el demandante don Miguel Pedro Anglés Chateau, tiene por objeto obtener la íntegra reparación por los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, conforme tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de normas de derecho interno en conformidad a la actual Constitución Política de la República.

NOVENO: Que el derecho a la acción de las víctimas encuentra su fundamento en los principios generales de derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º y en el artículo 6º de la Constitución Política.

DÉCIMO: Que de la prueba acompañada en autos, no objetada de contrario y de conformidad a los artículo 342 n° 2, artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1702 del Código Civil, este Magistrado puede establecer siguientes hechos o circunstancias de la causa, los que, vale decir, tampoco han sido controvertidos por el Consejo del Defensa del Estado:

1.- Que don Miguel Pedro Anglés Chateau ha sido reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), lo que se acredita a través del ORD. DSGT N° 27792/2024, singularizado en considerando séptimo de esta sentencia. La parte demandante no acompañó la Nómina de Personas Reconocidas como

Víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Sin embargo, tratándose de información disponible en página internet del Instituto Nacional de Derechos Humanos, consta que don Miguel Pedro Anglés Chateau se encuentra reconocido como víctima de prisión política y tortura, con el número 1333 de la Nómina.

2.- Que don Miguel Pedro Anglés Chateau fue detenido en Santiago en septiembre de 1974, estuvo detenido, fue torturado y puesto en libertad en febrero de 1975.

3.- Que por Decreto N° 149 de 05 de febrero de 1975, emanado de Presidente de la República, se decreta el abandono obligado del país de don Miguel Anglés Chateau, por “constituir un peligro para la seguridad interior del Estado”.

4.- Que don Miguel Pedro Anglés Chateau es beneficiario de reparaciones de las leyes 19.992 y 20.874 desde mayo del año 2005, habiendo recibido a septiembre de 2024 un monto total por estos conceptos de \$45.226.759.-

5.- Que don Miguel Pedro Anglés Chateau recibe actualmente una pensión de \$290.413.-

RESPECTO EXCEPCIONES PERENTORIAS OPUESTAS POR EL FISCO DE CHILE.

UNDÉCIMO: Que la demandada Fisco de Chile, representada por el Consejo del Defensa del Estado opone excepciones perentorias a la demanda impetrada por el actor don Miguel Pedro Anglés Chateau. Que tengan el carácter de “perentorias” significa que tienen por objeto enervar la acción deducida y se dirigen al fondo del asunto debatido. Según la doctrina, las excepciones perentorias son múltiples, porque dependen de los derechos que se deduzcan, toda vez que por cada acción se contempla como regla general, una excepción y de ahí que se estime que serían innumerables los medios que el demandado puede oponer para obtener el rechazo de la demanda. Están constituidas, por regla general, por los modos de extinguir las obligaciones. En el caso de marras la demandada Fisco de Chile, representada por el Consejo del Defensa del Estado opone excepción de reparación integral y prescripción extintiva, por lo que se resolverán a continuación en el mismo orden impetrado.

1.- Excepción de reparación integral por haber sido el demandante ya indemnizado por la misma causa.



DUODÉCIMO: Que en cuanto a la excepción de reparación integral opuesta por la demandada Consejo del Defensa del Estado, consta de que don Miguel Pedro Anglés Chateau, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura es beneficiario de reparaciones de las Leyes 19.992 y 20.874, y que en el período mayo del año 2005, a septiembre de 2024, ha percibido un monto total por estos conceptos de \$45.226.759.-

DÉCIMO TERCERO: Que los beneficios otorgados por el Estado que enumera el Consejo del Defensa del Estado en su contestación, así como los otorgados por la Ley N° 19.992 que Establece Pensión de Reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, tienen una naturaleza asistencial y no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido. Los beneficios reconocidos por estas leyes especiales no afectan ni imposibilitan acceder a la indemnización derivada del ilícito en que se funda la acción; sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. Cuestión aparte es acreditar los supuestos de la indemnización de perjuicios que se solicita, según las reglas generales.

DÉCIMO CUARTO: Que en cuanto a la reparación efectiva de todo daño sufrido, este Magistrado se referirá, en lo pertinente, a artículo publicado en la Revista Chilena de Derecho Privado n° 15, diciembre 2010, por el profesor de Derecho Civil don Ramón Domínguez Águila. Señala el autor que el principio de reparación integral, tal cual ha sido clásicamente reconocido, manda que el perjuicio sea el límite de la reparación. Se indemniza todo el perjuicio, pero nada más que el perjuicio. Este principio forma parte del sistema de responsabilidad civil y más ampliamente aún, del sistema general de reparación del daño. Pero el hecho de ser un principio no significa que no comprenda limitaciones. En numerosos supuestos la indemnización no alcanza a la integridad del perjuicio sufrido. Se tratará siempre de excepciones, las que son variadas: algunas que derivan del funcionamiento mismo del sistema de reparación, otras en razones de tipo económico y, otras, tienen un fundamento legal, jurisprudencial o convencional. El principio de reparación integral está sujeto siempre, en su aplicación concreta, al tema de la evaluación del daño, evaluación que queda entregada a la competencia exclusiva de los jueces del fondo. La cuestión que se presenta, según el autor, es la de determinar si las leyes reparatorias existentes (Ley 19123 o Ley 19992) cierran la vía a obtener la reparación, por ejemplo, del daño moral sufrido con cargo al Estado. Enuncia una sentencia de la Corte de



Apelaciones de Santiago de 3 de agosto de 2009, que señala que nada impide esa acción, pero la cuestión no es evidente y consideraciones fundadas en el peso económico que ello significaría para los fondos estatales llevan a entender que al ofrecerse legalmente las satisfacciones económicas allí previstas, la ley ha querido determinar los daños indemnizables.

DÉCIMO QUINTO: Que atendido lo expuesto, la excepción de reparación integral opuesta por el Consejo de Defensa del Estado, habrá de ser rechazada; sin perjuicio de lo que se resolverá respecto al fondo de la acción deducida.

2.- Respecto a la excepción de prescripción extintiva.

DÉCIMO SEXTO: Que en cuanto a la excepción perentoria opuesta por la demandada Consejo de Defensa del Estado, de prescripción extintiva de la acción civil emanada del ilícito (sea la de 4 años que emana de la responsabilidad extracontractual o de la regla general de 5 años opuesta en subsidio por la demandada), se rechazará por considerar este Magistrado que tratándose de delitos de lesa humanidad, como es el caso de marras –no controvertido por la demandada- la acción de la víctima es imprescriptible. La demandada ha intentado adecuar los plazos de prescripción contando (de conformidad al artículo 2514 del Código Civil) desde la fecha de retorno a la democracia. En tanto el Fisco acepta la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil –ocurrencia de los hechos-, no puede sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación, sin que esta omisión importe contravenirlos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que tratándose de crímenes de lesa humanidad, estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de personas que supuestamente y a completa discreción de los perpetradores, se oponían al régimen militar, como si aquello constituyera un delito o crimen, o aún en contra de simples civiles sin vinculación política alguna. Tales crímenes en Chile fueron cometidos por agentes del Estado o por civiles amparados por éste, lo cual es aun de mayor gravedad y lo que constituye, en esencia, un crimen de lesa humanidad. Es crimen de lesa humanidad-o contra la humanidad- según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, “todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o



traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (Boletín Oficial del Estado, «Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en Roma el 17 de julio de 1998»).

DÉCIMO OCTAVO: Que no ha sido controvertido por la demandada Consejo del Defensa del Estado que el caso de marras se encuadra en aquellos crímenes de lesa humanidad, en este caso la detención ilegal y tortura de don Miguel Pedro Anglés Chateau por agentes del Estado. Corresponde determinar a continuación si la acción civil emanada de aquellos crímenes son o no prescriptibles. En el caso de determinar y sancionar la responsabilidad penal en este tipo de crímenes, no es debatido que son imprescriptibles. Así se establece expresamente, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, como son causas Rol N° 1424-2011 de fecha 1 de abril de 2014, causa Rol N° 4300-2014, de septiembre de 2014, causa Rol N° 21.177-2014, de fecha diez de noviembre de 2014.

DÉCIMO NOVENO: Que habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, correspondería determinar si la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario, debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil. Como ya se adelantó, este Magistrado es de opinión que la acción civil derivada de tales crímenes, es imprescriptible, opinión que encuentra asidero en fallos emanados de la Corte Suprema: Rol N° 3841-12 de 4 de septiembre de dos mil trece, Rol N° 23.441-14 de 28 de abril de dos mil



quince, Rol N° 25.138-14 de veinticinco de mayo de dos mil quince, rol N° 796-16 de 30 de junio de dos mil dieciséis.

VIGÉSIMO: Que la presente acción civil indemnizatoria, derivando justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la acción civil esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002 sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en fallo emanado de nuestra Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 25.138-14, se expresa: “Tercero: Que sin perjuicio de lo razonado en la sentencia que se revisa, en reiterada jurisprudencia esta Corte ha sostenido que, tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que en la especie ha sido declarado-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. (En este mismo sentido, SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras). Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigualado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad



derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente. Por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado. Cuarto: Que en el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado. Quinto: Que por otro lado, las acciones civiles aquí deducidas por las víctimas en contra del Fisco tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentran su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Sexto: Que estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón no resultan aplicables a estos efectos las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el recurso, pues ellas contradicen lo dispuesto en la



normativa internacional. Séptimo: Que de otra parte, la indemnización del daño producido por el delito y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, todo lo cual condujo a acoger las acciones civiles deducidas en autos, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Octavo: Que, por último, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también de los artículos 6 inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del recurso del Fisco de Chile, quedarían inaplicadas (...).”

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que según ha entendido nuestra jurisprudencia, nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas, principios y reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De acoger la tesis de prescriptibilidad planteada por la demandada, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro país. En efecto, Chile ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico. A su vez, lo señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto dispone que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de los derechos y el pago de una justa indemnización



a la parte lesionada, imperativo legal que se encuentra incorporado a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la Constitución Política de la República.

VIGÉSIMO TERCERO: Que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

VIGÉSIMO CUARTO: Que atendido todo lo expuesto, este Magistrado rechazará la excepción de prescripción extintiva opuesta por la demandada, estimando que la acción civil emanada de una acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad –cual es el caso de marras-, también es imprescriptible.

RESPECTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL DEMANDANTE.

VIGÉSIMO QUINTO: Que teniendo presente todo lo expuesto, este Magistrado concluye en cuanto al fondo que corresponde acoger la procedencia de indemnizar por el daño moral sufrido con ocasión de la detención ilegal y apremios ilegítimos respecto a don Miguel Pedro Anglés Chateau, perpetrado por agentes del Estado. A continuación se fijará la cuantía de la indemnización.

VIGÉSIMO SEXTO: Que en reiterada jurisprudencia la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada, culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en relación con el daño, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular, el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que este constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia. La indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba



legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso. También puede ser entendido, siguiendo al profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo. Siguiendo a José Luis Diez Schwerter, el daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que para acreditar el daño moral sufrido, el actor ha aparejado un documento denominado “Evaluación de Daño” de fecha 05 de septiembre de 2024, respecto a don Miguel Pedro Inglés Chateau, evaluado por Ignacio Andrés Fernández Rosas, Psicólogo Universidad de Chile Magíster Psicología Clínica Adultos - Universidad de Chile; quien concluye:

- 1.- Que en base al material discursivo levantado, es factible aseverar que don Miguel Pedro Inglés Chateau presenta diversos daños psicológicos producto de la violencia extrema de la dictadura, destacando el daño en su proyecto de vida, trastorno de estrés postraumático crónico, e impactos vinculares asociados al exilio y retorno.
- 2.- Que el daño en su proyecto de vida se configura por la fractura en su desarrollo económico laboral que implicó la exoneración, la prisión política y el posterior exilio. Además, con el exilio se dañó un proyecto familiar que implicaba un desarrollo en Chile, es decir, con la idiosincrasia y con las redes que tenían en el país.
- 3.- Que uno de los daños psicológicos principales es el desarrollo de trastorno de estrés postraumático crónico, el cual se generó al haber sido sometido a violencias deshumanizantes, siendo objeto de torturas físicas y psicológicas. En este sentido, en el tiempo de prisión es empujado a un estado de vulnerabilidad e indefensión que implicó que sintiera angustia e incertidumbre por el estado de su esposa e hija y que experimentara miedo extremo ante las violencias. Además, las



humillaciones, junto con amenazas de daño a hija y esposa, son aristas particularmente traumatizantes. De este modo, tras prisión desarrolla diversa sintomatología traumática, como el cambio en su carácter, sintiendo que se volvió irascible y portador de amargura, así como sueños traumáticos. A su vez, con el retorno a Chile, experimenta retraumatizaciones, lo que incide en sueños traumáticos, estados de alerta, así como permanente incertidumbre y miedo por el estado de su familia. Junto con ello, el impacto traumático se ha cronificado en rabias y miedo que se prolongan, particularmente, un miedo desproporcionado ante eventuales problemas o dificultades que vivan hijos o nietos.

4.- Que el exilio implicó diversos daños psicológicos, al ser un cambio forzado de país, se cortó un trato cotidiano con familiares y con la idiosincrasia chilena. Además, hubo daños vinculares, como la profunda tristeza que sintió cuando su hija pequeña al llegar a Francia no lo reconoce, así como los impactos relacionales asociados al retorno a Chile, particularmente, el reclamo de hijos por verlo poco en casa, así como la frustración y enojo de su entonces esposa, incidiendo la diferencia en torno a la decisión de retornar en la separación del matrimonio.

5.- Que la actual precariedad y banalización de las vías estatales de reparación insisten en la prolongación de rabias y frustraciones, viviendo con dolor el estado de pobreza y/o soledad en que fallecen amistades o compañeros de militancia también dañados en dictadura, A su vez, vive con indignación la precariedad del reconocimiento estatal al daño que ejerció la dictadura a diferentes personas, percibiendo que se refleja ello en políticas públicas que vuelven a vulnerar.

VIGÉSIMO NOVENO: Que por todo lo expresado, considera este Magistrado que se encuentra acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado al demandante don Miguel Pedro Anglés Chateau por su detención forzada y apremios ilegítimos, ocurridos entre septiembre de 1974 a febrero de 1975; y su posterior expulsión del país, cometido por agentes del Estado. Habrá de señalarse que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja, más aún cuando no se aportaron mayores antecedentes, carga que le correspondía al actor, de conformidad al artículo 1698 del Código Civil. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido.



TRIGÉSIMO: Que a este respecto, se acogerá la defensa opuesta por el Consejo de Defensa del Estado, en subsidio de las excepciones de reparación y prescripción, en cuanto a regular el daño moral considerando los pagos ya recibidos por el actor de parte del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. A este respecto, el actor don Miguel Pedro Anglés Chateau ha solicitado como monto indemnizatorio, la suma de \$150.000.000. Teniendo presente la prueba aparejada, y lo ya expuesto, aplicando la sana crítica, el daño moral se evaluará prudencialmente, en la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que la suma fijada prudencialmente se pagará reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor y más intereses legales, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que en nada altera lo señalado anteriormente, las demás pruebas aportadas por las partes.

POR ESTAS CONSIDERACIONES Y VISTO, además, lo dispuesto en los 5 y siguientes y 38 de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.992 y Ley N° 19.980; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27 y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil,

SE RESUELVE:

I.- Que se rechaza la excepción de reparación integral impetrada por la demandada Consejo del Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile.

II.- Que se rechaza la excepción de prescripción extintiva, tanto la de 4 años como la de 5 años, impetrada por la demandada Consejo del Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile.

III.- Que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta por don Miguel Pedro Anglés Chateau en contra del Fisco de Chile, y se condena a éste a pagar en favor del demandante la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) fijada prudencialmente por este Magistrado.



IV.- Que la suma indicada se pagará reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, y más intereses legales, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada esta sentencia y se realice el pago efectivo de la indemnización.

V.- Que cada parte soportará sus costas.

CONSÚLTESE, SI NO FUERE APELADA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 751 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

REGÍSTRESE.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE O POR CÉDULA.

ROL C-2475-2024

**DECTADA POR DON LUIS OSVALDO CORREA ROJAS, JUEZ
TITULAR DEL DÉCIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO**

AUTORIZA DOÑA FABIOLA PAREDES ARAVENA, SECRETARIA
SUBROGANTE DEL DÉCIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE
SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. en **Santiago, trece de enero de dos mil veinticinco**

